

Colombia, tierra y territorios



Informe de ISF Asturias en la XV Delegación de
verificación de Derechos Humanos en Colombia.
Febrero - Marzo 2019
Víctor González Lorenzo

Índice

Introducción: el problema de la tierra en Colombia

Nariño, una calma pactada

El polvorín del Norte del Cauca

El Sur de Córdoba resiste

Sucre, el problema del agua

Bogotá, instituciones

Sumapaz, las mineras ¡No pasarán!

Conclusiones

Introducción: el problema de la tierra en Colombia

La propiedad de la tierra es una de las razones históricas del conflicto social en Colombia que se hereda aún de la época de la conquista. La concentración de tierras en pocas manos tiene una responsabilidad bien definida, el estado, la iglesia, los terratenientes y los actores armados que han llevado en demasiadas ocasiones al despojo y al desplazamiento forzado de las comunidades rurales. Las cifras hablan de 7 millones de hectáreas despojadas y 8 millones de personas desplazadas. Esto, sumado a los conflictos que han enfrentado al gobierno colombiano con diversos grupos armados y en especial el que le ha enfrentado con las FARC durante más de 50 años, tiene como consecuencia que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo.

Han sido muchos los intentos de solucionar el problema a través de las luchas y movilizaciones en el caso de la población rural y de reformas y leyes por parte de los diferentes gobiernos, pero hasta el momento no sólo no se ha acabado con el problema, sino que sigue agravándose. Desde la ley de Víctimas y Restitución de tierras promulgada en 2012 apenas se habían devuelto 100.000 hectáreas del millón que se había fijado como objetivo en 2016.

Por todo esto, uno de los aspectos más importantes de los Acuerdos de la Habana es el punto I: la “*Reforma Rural Integral*” creado con el propósito de mejorar el bienestar de las personas que habitan el campo como base para la paz. Así, se acordó la creación de un fondo de tierras de 6 millones de hectáreas para repartir al campesinado sin tierras o con tierras insuficientes y víctimas del despojo y la implementación de planes para proveer de bienes y servicios públicos a las zonas rurales.

De ahí que la XV Visita de Verificación de Derechos Humanos en Colombia esté orientada a las tierras y territorios de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas.



Nariño: una calma pactada.

La llegada al aeropuerto militar de Tumaco ya da una idea de la situación de inseguridad en el departamento de Nariño: militares por doquier y helicópteros *"Black Hawk"* aterrizando y despegando desde primera hora de la mañana. La ciudad de Tumaco conocida como *"la perla del pacífico"* cuenta con una población mayoritariamente afrodescendiente y a pesar de estar en una de las zonas más húmedas del planeta sólo el 10% de sus más de 200.000 habitantes cuenta con acceso a agua potable.

Desde el aeropuerto la delegación se desplaza vía furgoneta hasta el resguardo indígena Awá *"Tortugaña Telembi"*. Más de tres horas de desplazamiento por carreteras bordeadas por selva profunda dónde abundan los retenes custodiados por militares con cara de adolescentes, en muchas ocasiones alrededor de colegios, lo que viola el derecho internacional humanitario. Aparecen también muchas pintadas del ELN en las fachadas de las casas que se ven desde la carretera.

Una vez en el resguardo; autoridades Awá, el consejo mayor de la UNIPA, varios gobernadores de los resguardos cercanos y la directiva de Camawuari ponen a la delegación en contexto: este resguardo se crea por el desplazamiento forzoso de indígenas del pueblo Awá tras la masacre perpetrada por las FARC en agosto de 2009 en la que ocho personas fueron asesinadas. Esta zona es un corredor estratégico tanto para el narcotráfico como para la guerra y los grupos armados llevan años disputándose la.



Los acuerdos de paz que ilusionaron y mitigaron la actividad militar en la zona en un principio se están incumpliendo sistemáticamente, en especial la erradicación de cultivos ilícitos que se realiza de forma forzada y sin alternativas. Se calcula que por cada 1000 hectáreas de coca eliminadas 850 son replantadas y que las fumigaciones forzosas afectan a plantaciones de otros cultivos lícitos como plátano, yuca o maíz.

El oleoducto transalpino que cruza el departamento de Nariño de este a oeste sufre ataques continuos por parte del ELN y grupos de narcotraficantes (el crudo se roba para sintetizar cocaína) haciendo que los vertidos sean habituales en los territorios Awá y se contaminen los ríos que abastecen a los resguardos. No sólo el oleoducto es zona de conflicto, desde la desmovilización de las FARC diferentes grupos armados se disputan el territorio: ELN, disidencias de las FARC, grupos paramilitares y narcotraficantes amenazan a las comunidades indígenas y en especial a sus líderes y lideresas. Son habituales los toques de queda en los resguardos, la prohibición del uso del móvil, los reclutamientos forzosos (incluso de menores), los falsos positivos (que en vez de asesinatos acaban en judicializaciones y cárcel) y los asesinatos selectivos. A pesar de que la vía principal de Nariño (Tumaco - Pasto) está completamente militarizada se asesina a personas en sus cunetas. Nos cuentan que hay una especie de tregua entre los diferentes grupos, al parecer no les conviene aún enfrentarse entre ellos. También preocupa la minería ilegal, cada vez más frecuente y que condena al desplazamiento a las personas que ejercen la minería tradicional del oro como vía de subsistencia.

Un joven Awá nos informa de la "masacre del palmar" en diciembre del año pasado. Tras la elección del nuevo gobernador un grupo armado irrumpe en "la casa del pensamiento" asesinando al gobernador recién elegido y a su padre (uno de los sabios del resguardo). La respuesta del estado: "fue una riña familiar". Las amenazas se centran ahora en una juventud cada vez más empoderada que está cogiendo el testigo del liderazgo y que cuenta con la única protección de la guardia indígena (desarmada y pacífica).

Después un viaje de vuelta un poco apurado por la amenaza del toque de queda en la zona, volvemos a Tumaco donde pasamos la noche y nos reunimos la mañana siguiente con líderes y lideresas de los consejos comunitarios de Nariño, palenques, representantes de la mesa interétnica de género, ASOLINAR (colectivo feminista) y la persona que realiza el seguimiento de la implementación de los acuerdos de paz en la zona.

Nariño es una de las zonas marcadas por el estado español como destino de los recursos de cooperación, recursos que, según nos cuentan se van en capacitaciones innecesarias, “pañitos de agua caliente” que no tienen repercusión en las personas a las que deberían beneficiar. Además, la corrupción también hace mella en este tipo de ayudas por el nefasto seguimiento que se hace de los recursos.

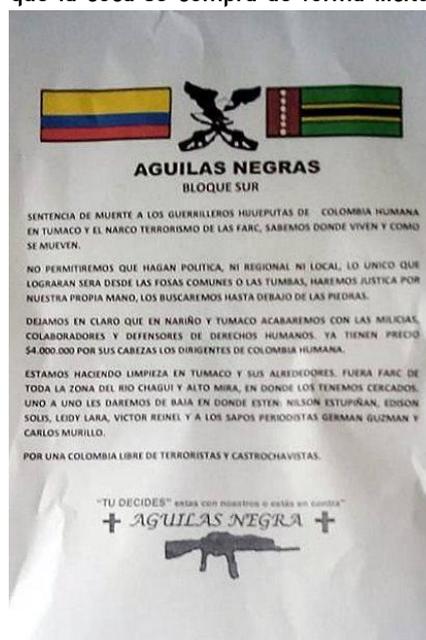


“Los awá no fuimos y no iremos a la guerra”

Al contrario que en la jornada del día anterior donde la participación femenina fue muy reducida en esta reunión se roza la paridad y podemos escuchar de primera mano las problemáticas de las mujeres de Nariño. Si bien con la implementación de los acuerdos de paz se suavizó la violencia contra las ellas, con la aparición de los nuevos actores armados se está llegando a niveles superiores. La violencia sexual y la trata son las dos mayores problemáticas, pero no las únicas. Son muchas las mujeres que están liderando la sustitución de cultivos ilícitos o incluso el uso alternativo de éstos a través de licencias, pero el gobierno tarda en responder con las licencias y los proyectos no arrancan. Mientras que la coca se compra de forma ilícita incluso antes de plantarla otros cultivos como el cacao necesitan entre 13 y 15 años para producir y no hay ninguna garantía de poder venderlo a un precio justo. En el caso de la restitución de tierras los progresos son mínimos si se trata de hombres, pero nulos si son mujeres quienes lo solicitan.

Los líderes y lideresas que están llevando el peso de hacer cumplir los acuerdos sufren amenazas, judicializaciones y habitualmente asesinatos, el gobierno ha delegado esta responsabilidad sin contar con que las personas que la ejercen lo hacen de forma voluntaria, sin ningún tipo de garantía y con esquemas de seguridad insuficientes (por ejemplo, un chaleco antibalas y un móvil personal) o que sirven para monitorear los pasos de los líderes cuando consiguen un coche blindado. 4 millones de pesos colombianos es la recompensa que ofrece el grupo paramilitar Águilas Negras en sus panfletos por la vida de algunas de las personas presentes en la reunión, a pesar de que el gobierno niega la existencia de este grupo.

Toda esta problemática no acaba en las zonas rurales, los barrios más empobrecidos de Tumaco no cuentan con servicios mínimos



de sanidad, en 16 escuelas no se han iniciado aún las clases, lo que unido al aumento de presencia de grupos armados en los barrios y la falta de oportunidades para la juventud lleva al reclutamiento de menores. Los grupos armados ilegales se acercan a los niños y niñas, pero también el ejército les utiliza como informadores.

En estos barrios se alojan también las 206 personas desmovilizadas de las FARC que no entraron en los acuerdos por desmovilizarse antes de que se firmaran y fueron tratadas por las FARC como desertoras. Sin oportunidades laborales y amenazas frecuentes están volviendo a las veredas para retomar las armas.

Durante la comida posterior a la reunión, mientras la televisión muestra sin pausa el concierto de “*Venezuela Aid Live*” recibimos la noticia de la ruptura de la tregua entre grupos armados que ocupan zonas del departamento de Nariño dos de ellos, aún identificados, desataron las hostilidades a la altura de Llorente, a medio camino entre el resguardo visitado el día anterior y la ciudad de Tumaco por donde pasó la delegación esa misma noche.



“En Tumaco el ejército asesinó a siete campesinos en 2017 en la masacre del Tandil por oponerse a la erradicación forzada de coca. Nadie ha sido sancionado”

El polvorín del Norte del Cauca.

Después de viajar hasta Cali y pasar allí la noche, la delegación se desplaza vía autobús a Santander de Quilichao entre los inacabables campos de caña azucarera que unen el Valle y el Norte del Cauca.

En Santander de Quilichao (Norte del Cauca) el pueblo NASA nos recibe en la nueva sede de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) dónde nos reunimos también con el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia).

Sorprende desde el principio la organización de la ACIN: el pueblo Nasa se compone de más de 120.000 personas y cuentan con más de 1.000 personas trabajando como funcionarias en sus 220.000 hectáreas de territorio. En la nueva sede comienzan a funcionar ahora servicios de contabilidad comunal y de inteligencia que servirá de ayuda a la guardia indígena. También cuentan con un almacén y un despacho dónde se guardan y distribuyen los productos que se recogen en los resguardos.

El contexto del Norte del Cauca es el peor que se vive desde 2013 por la escalada de violencia que se está produciendo. En este departamento operan el ELN, el EPL, disidencias de las FARC (en especial las GUP, Guerrillas Unidas del Pacífico, que cuentan con una amplia capacidad militar), los grupos paramilitares Águilas Negras y los Rastrojos, además de cárteles de narcotráfico como el de Sinaloa. La presencia de todos estos grupos supone una amenaza para la población indígena, campesina y afrocolombiana por las incursiones que realizan a sus territorios y los daños colaterales de los combates que



libran entre ellos, como es el desplazamiento forzoso. En los últimos tiempos el ELN ha hecho de las dirigencias sociales un nuevo objetivo militar. A pesar del refuerzo de la guardia indígena, que ha requisado y quemado más de 25 armas sólo durante este año, se producen reclutamientos de jóvenes en los resguardos, hay toques de queda, campos minados y desplazamiento de grupos armados por territorios indígenas ante la pasividad de las fuerzas armadas colombianas que desde la firma de los Tratados de Paz acumulan cada vez más tropas en la zona. Preocupa mucho a las autoridades indígenas que entre las 25 armas incautadas aparecieran varias con silenciadores, la guardia indígena no está preparada para luchar contra estos instrumentos.

Por si no fuera suficiente con el conflicto armado, el conflicto por la tierra está también en sus máximos. Según un proyecto, la nueva carretera de Floridavalle cruzará un resguardo Nasa, lo que ha provocado movilizaciones por parte del pueblo Nasa y una represión por parte de las autoridades que ha acabado con el desplazamiento forzoso de una joven gobernadora indígena al País Vasco que se oponía a la construcción de esta carretera. La restitución de tierras avanza muy lentamente y creando tensiones entre comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Con la finalidad de analizar y acabar con estos conflictos surge una iniciativa no mixta dentro del Consejo Interétnico que busca fortalecer los territorios a través de estrategias y alianzas entre las guardias indígena, cimarrona y campesina.

Una vez acabada la reunión nos informan del último asalto que tuvo lugar en la finca "La Emperatriz" muy cerca de Santander de Quilichao y nos ofrecen ir a conocer la finca y a las personas que mantienen su ocupación desde 2015. Un día antes de que la delegación llegara al Norte del Cauca, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) entró en la finca arrasando con las infraestructuras, los cultivos y disparando con munición real que hirió a dos de las personas que defendían (desarmadas) el territorio.

Esta finca es una de las tres que distintos gobiernos ofrecieron a la comunidad indígena como compensación tras la masacre del Aro en 1997 (15 personas asesinadas), una oferta que nunca se hizo realidad. Ahora lleva ya más de tres años en el proceso de “*liberación de la madre tierra*”. En una zona dominada por el cultivo de caña el pueblo Nasa consideró que ya era suficiente de agricultura industrial insostenible y tras la liberación dedican estos terrenos a la ganadería y a cultivar comida para los resguardos: frijol, maíz y plátano, al menos hasta que el monocultivo de caña desaparezca y dé paso a la diversidad.



En el paseo por la finca se pudo constatar la desproporción del ataque de las fuerzas de seguridad colombianas a la finca, botes de gas potenciados con metralla, quema y destroz de casas y cuadras, destrucción de cultivos y vallados de ganado y lo más impactante, dos personas heridas por armas de fuego. Todo esto teniendo en frente a indígenas que ejercen la resistencia sin ningún tipo de arma. También se pudo constatar que nadie se rinde en La Emperatriz, sólo un día después del ataque ya se estaban reconstruyendo las casas y las cuadras, se estaban levantando nuevos vallados y preparando la tierra para sembrar de nuevo alimentos con los que abastecer a los resguardos.



La mañana siguiente, aún en Santander de Quilichao nos reunimos con ACONC, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Esta asociación está formada por 43 consejos comunitarios en los que viven 150.000 personas. ACONC apostó por el proceso de Paz desde el principio cuando convocaron una manifestación en favor de los tratados que rompió todas las expectativas y acabó concentrando a más de 10.000 personas. Desde entonces se dieron cuenta de que el de la paz no iba a ser un camino fácil, el mismo día del acto, ACONC había contratado a personas locales para gestionar la logística de la movilización, estas personas nunca aparecieron debido a las amenazas que sufrieron a cargo de grupos paramilitares: los Rastrojos y las Águilas Negras. Desde entonces las amenazas se generalizaron a todas las personas que luchaban por la paz desde los Consejos Comunitarios. La frase *"Los niños buenos se acuestan temprano, a los niños malos los acostamos nosotros"* cierra los panfletos que anuncian los toques de queda y que aparecen en las veredas de madrugada si las fuerzas de seguridad colombianas no los retiran antes. Y es que a pesar de las amenazas y de las 4 personas desaparecidas en 2018, el gobierno no ve amenaza paramilitar en esta zona.

La guardia cimarrona trabaja sin descanso para sacar a las personas amenazadas de la zona, en colaboración con la guardia indígena. Roxana Mejía, presente en la reunión, pasará los próximos 6 meses refugiada en Euskadi para intentar reducir la presión sobre ella y hacer sensibilización sobre la situación colombiana en España.



Las empresas no se quedan atrás en la vulneración de los Derechos Humanos, concretamente Huevos Kikes y Cervalle que se asientan en la zona y extorsionan a la población para evitar que críen animales de forma tradicional. La ganadería intensiva que desarrollan tiene graves afectaciones en el medio ambiente y han motivado movilizaciones por parte de los consejos. Las empresas por su parte empezaron con la contratación de seguridad privada, pero nos aseguran que Huevos Kikes tiene un batallón del ejército colombiano para su defensa porque según el propio ejército, *"la empresa tributa más que las comunidades afros"*. En las zonas cercanas a los emplazamientos de estas empresas se están registrando casos de explotación sexual de mujeres y menores.

El Sur de Córdoba resiste.

El Sur de Córdoba es una de las zonas más peligrosas del mundo donde ejercer el activismo social y en estos momentos la situación es crítica. 28 personas han sido asesinadas desde 2016 por ejercerlo. De ahí la decisión tomada por la delegación de aceptar por primera vez una escolta policial y militar para desplazarse desde el aeropuerto de Montería hasta la vereda de Juan José. Esta zona de Colombia ha sufrido durante el conflicto el despojo masivo y violento de tierras que ha acabado con el silenciamiento social del campesinado.

El viaje comienza por una carretera que discurre entre plantaciones inmensas de palma africana hasta llegar a una mina. Pasada la mina se acaba la carretera y aún aguardan cuatro horas más de viaje hasta llegar a nuestro destino por un camino de piedra y polvo en medio de un paisaje de sabana en el que desaparecen las plantaciones de palma y comienzan a verse grandes haciendas dedicadas a la ganadería.



En Juan José nos reciben representantes de las Juntas de Acción Comunal y asociaciones campesinas y juveniles bajo la mirada de un pelotón militar que desaparece a los pocos minutos de empezar la reunión. Después de muchos años bajo el dominio de las FARC o de las Águilas Negras y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar con mucha influencia en la zona de Córdoba) ahora son las disidencias de las FARC, el autodenominado "Nuevo Frente XVIII", y grupos de narcotraficantes mexicanos como el Cártel del Golfo las fuerzas que ocupan esta región y ejercen presión sobre la población. La sistemática es más grave incluso de lo que se había visto hasta el momento: además de los toques de queda, se producen bloqueos alimentarios, de medicinas y de comunicaciones prohibiendo el uso de teléfonos: *"Al que vean con el celular, le dan"*. El desminado humanitario que aparecía en los Acuerdos no ha llegado, todo lo contrario, los nuevos grupos armados también minan las zonas perimetrales de sus dominios.



Los asesinatos se resuelven generalmente con falsos positivos, se acusa a niños que sólo son los autores materiales y las investigaciones acaban ahí, sin responsables intelectuales por la autoría de los crímenes. Las únicas entidades que se han interesado por el estado de la situación en la zona son la Personería y la Defensoría del pueblo, pero por el momento no se ve ningún resultado.

El gobierno calcula que hay más de 4000 hectáreas de coca en Córdoba, dato que, según nos dicen, estaría inflado y la producción real rondaría el 40% de esa cantidad. ¿Por qué inflar estos datos? para justificar las fumigaciones forzadas utilizando drones y helicópteros. A pesar de que existe una gran voluntad por parte del campesinado para sustituir los cultivos ilícitos, los bonus por sustitución no han llegado y no hay alternativas, se acaba sembrando coca porque no hay otra manera de seguir adelante.

Con el objetivo de superar las causas del conflicto por la tierra y crear las condiciones necesarias para la paz y la justicia social se está impulsando la creación de una Zona de Reserva Campesina. No hay ningún tipo de voluntad por parte del gobierno, además, parece haber intereses mineros en la zona. Una Zona de Reserva Campesina traería mejoras en el ordenamiento del territorio, en el cultivo de productos ambientalmente sostenibles, en el impulso y el fortalecimiento de la economía campesina y en el desarrollo social, ambiental y político del territorio.

En el mes de enero debería haber empezado el curso escolar en las veredas, pero aún no hay profesorado contratado, la entidad privada-religiosa "Jehová Edifica" encargada de las contrataciones no las ha llevado a cabo. Es difícil encontrar personas que quieran trabajar en las veredas en unas condiciones sociales muy complicadas y con unos salarios muy bajos. Sin educación, el narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas lo tienen mucho más fácil para reclutar menores de edad.



“¿La paz? La paz es el plomo que nos están dando”

Sucre, el problema del agua.

A pesar de contar con uno de los acuíferos más importantes del Caribe (el acuífero Morroa) que ha estado abasteciendo hasta a 600.000 habitantes de la zona, incluido el municipio de Sincelejo, ahora el agua sólo llega allí tres veces por semana a través de camiones cisterna y se recoge en unos grandes depósitos de plástico colocados sobre los tejados de las casas.

El acuífero está siendo sobreexplotado desde hace 15 años por la empresa encargada del suministro de agua. Las redes de distribución tienen más de 40 años, están obsoletas y generan pérdidas de hasta el 60% del total del agua extraída, por lo que se extrae mucha más agua de la necesaria, haciendo imposible la recarga del acuífero por medios naturales.

Desde 2013, una Mesa Ciudadana de Servicios Públicos empezó a utilizar la acción popular ante el Tribunal Administrativo de Sucre que falló a su favor en 2018, exigiendo a las instituciones responsables (la empresa concesionaria del servicio, el ente autónomo de medio ambiente de Sucre y la administración local) tomar las medidas necesarias para acabar con la sobreexplotación, entre ellas la recarga artificial del acuífero. Las sentencias están ahí, pero por el momento no se están cumpliendo, lo que está generando una gran movilización ciudadana en todo el departamento. Todo esto nos lo cuentan durante el viaje que nos lleva hasta la finca de la Alemania, en la región de los Montes de María.

La finca de la Alemania fue adjudicada a 52 familias campesinas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria en 1997 pero poco después comenzaron las amenazas y los asesinatos. Las Autodefensas Unidas de Colombia ocuparon la finca provocando un desplazamiento de al menos el 80% de las personas que la habitaban y represión a quién ejercía la resistencia campesina. Entre 1998 y 2010 fueron asesinadas 15 personas, pero esto no frenó el retorno del campesinado desplazado. Ahora la finca ha sido recuperada y se gestiona por una empresa comunitaria, todas las personas que la trabajan son asociadas.



En la finca nos recibe con música tradicional Andrés Narváez y su banda "Kizzi Gaita". Andrés estuvo refugiado en Asturias hace unos años y ahora que no puede dedicarse a la agricultura por haber recibido 4 disparos en 2014 que le incapacitaron una mano (atentado del que salió vivo por muy poco), se dedica a la música y se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música tradicional del Caribe en Colombia. Esto no ha servido para hacer que disminuya la presión sobre él, la misma persona que intentó asesinarle, Héctor San Martín alias "Caballito", capataz de la empresa "Arepas Don Juancho" y condenado a 26 años de prisión por ello sigue libre y amenazando con acabar lo que empezó con Andrés. También nos reunimos allí con personas de las empresas comunitarias La Alemania y la Europa y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.



En una primera reunión en medio de la finca aparece la policía que se queda observando a una distancia respetable, al parecer patrullan la zona al menos tres veces por semana, pero no se sabe bien con qué intenciones.

Por la presencia policial y la delicadeza de los temas que se van a contar respecto a la policía, se decide dividir la reunión en dos, la mitad de las personas se quedan en el sitio inicial mientras que el resto nos ubicamos en uno de los almacenes de la finca. Las personas que viven en la finca nos hablan sobre la relación establecida en el departamento de Sucre entre narcotráfico, paramilitarismo y poder político, en especial en la localidad de San Onofre donde se producen irregularidades como que los avisos a la policía sean respondidos por paramilitares. Los paramilitares y los narcotraficantes nunca han abandonado la zona desde el gobierno de Uribe y tras la arremetida del gobierno de Santos limitaron las rutas de la droga que comenzó a quedarse en el territorio, de forma que se incrementó su consumo por adolescentes y se constató un aumento de la violencia sexual y la prostitución.

Con el nuevo gobierno se percibe una mayor libertad de los paramilitares, se han producido amenazas y extorsiones en la finca con la intención de conseguir viviendas dentro de ella y también robos de alimentos, además de reclutamiento forzoso de menores de hasta 6 años. Estos paramilitares se autodenominan "El Clan del Golfo". En la finca preocupan estas aproximaciones por el temor a sufrir un nuevo desplazamiento y se han pedido retenes policiales. A pesar de que hay personas con escolta y esquemas de seguridad se necesitaría un esquema colectivo que proteja a toda la población de la finca y ya existen tres informes de riesgo de la Defensoría del pueblo que lo piden. Otra medida que se pide para disminuir la presión es la presencia de acompañantes internacionales en la zona, los paramilitares temen la imagen internacional que puedan dar y reducen su presencia y sus amenazas.



El reclutamiento forzoso de menores por parte del paramilitarismo se beneficia de las escasas posibilidades que se ofrecen a la juventud, en el municipio de San Onofre se clausuró recientemente el instituto de formación profesional que era la única opción de estudio en la zona.

“Creamos verdugos de nuestro propio territorio”

Tanto en la finca de la Alemania como en la vecina de la Europa el proceso de restitución de tierras está estancado, con solicitudes pendientes desde hace más de 5 años. En el departamento de Sucre sólo 234 de las 3200 solicitudes de restitución han sido atendidas y únicamente 5 de ellas han ido contra empresas (como Agropecuaria de Bolívar, Agroservicios San Simón o Arepas Don Juancho) aún sabiendo que éstas son las causantes principales del despojo, el resto han solucionado pleitos entre el propio campesinado.

Tras los testimonios recogidos en la finca la delegación se desplaza de nuevo a Sincelejo para reunirse en el edificio de la Diócesis con representantes de la Mesa Sucreña por la Paz, la Fundación Sucre Diversa, la Corporación de Mujeres Afrocolombianas, el obispo de Sincelejo, la Corporación Nueva Esperanza (espacio de participación de mujeres del Caribe) y otras defensoras de DD.HH.

Durante esta reunión el paramilitarismo y su relación con las instituciones de Sucre y el narcotráfico vuelve a ser el hilo conductor. Los paramilitares extorsionan a la población: cobran impuestos al campesinado que cuenta con cierto número de animales o al que dispone de maquinaria agrícola y ejercen control poblacional exigiendo permisos para circular por ciertas zonas, en especial por los corredores para el narcotráfico hacia el Caribe, utilizados para sacar droga e introducir armas. Tampoco las personas desmovilizadas de las FARC en Sucre se libran de las amenazas, y en especial las mujeres excombatientes que son estigmatizadas y la violencia tras los acuerdos se ha recrudecido. Todo esto con la complicidad de las instituciones y las fuerzas de seguridad, la policía delega sus funciones en los grupos paramilitares y el único organismo en el que la gente confía es la Defensoría del Pueblo.

El paramilitarismo no es algo nuevo en Sucre, nos recuerdan el caso de la finca de *“El Palmar”* que servía de base de operaciones al jefe paramilitar de las AUC, Rodrigo Mercado, alias *“Cadena”*. En esta finca se han encontrado la mayor fosa común de toda Sudamérica, pero de las últimas 84 exhumaciones la fiscalía sólo ha entregado 22 a las familias de las víctimas.

El proceso de restitución de tierras no avanza, se deniegan las legalizaciones de títulos legítimos en favor de multinacionales que las dedican a la agroindustria (en especial a la de la palma africana), la minería y la ganadería intensiva. Se están produciendo compras masivas de tierras procedentes del despojo al campesinado. Estas compras masivas no se quedan en la zona rural, también en la costa se están vendiendo los territorios que antes eran de los pescadores, parece que el turismo en esta zona del Caribe está en alza, de hecho, las únicas mejoras en infraestructuras que se están construyendo están orientadas a ello.



Otro de los colectivos que más sufren en Colombia y en particular en la zona de la costa del Caribe es el LGBTI. Fuera de las políticas del gobierno que únicamente les ofrece subvenciones para montar peluquerías, estas personas son señaladas y estigmatizadas y les faltan oportunidades educativas. El colectivo es reconocido como un “grupo social” en vez de como minoría por el estado, faltan políticas públicas en este sentido.

El Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA llevó a cabo en Sucre un proyecto de concienciación con la ayuda de personas trans. El proyecto, mal gestionado, sin organización de base y sin sistematizar el alcance del programa acabó con el asesinato de 4 personas trans que participaban en él de manera voluntaria.

Desde 2016 nueve personas trans han sido asesinadas de manera violenta en Sucre (empalamientos, lapidaciones) dos de ellas desde que comenzó 2019. Para hacer visible y buscar salidas a esta situación se constituyó la fundación “Sucre Diversa” que empezó a recibir amenazas y ataques desde su creación y es que en este caso la amenaza es doble, por defender los derechos humanos y por no ser heterosexual.

“La democracia en Colombia no es plena, el paramilitarismo lo impide”

Bogotá, instituciones.

Una vez de vuelta en Bogotá la delegación comienza las reuniones con las instituciones colombianas e internacionales con objeto de contrastar los datos obtenidos en terreno. Debido a la amplia agenda programada para esos días hay que separar la delegación en dos grupos para poder atender todas las reuniones.

- Embajada española.

La embajada española es una visita habitual de la Delegación en los últimos años, la relación con esta institución es cordial, lo que favorece la agilización de los trámites administrativos del programa de acogida, que valoran muy positivamente.

Comienzan valorando la implementación de los acuerdos de paz con el nuevo gobierno. El punto 1 (que hace referencia a la Reforma Rural Integral) está completamente estancado, aunque el grueso de los acuerdos si se estaría cumpliendo, como la transición de las personas desmovilizadas de las FARC. El Ministerio de Exteriores de España lanzó en 1998 un programa de protección de defensores de derechos humanos que ha incrementado su trabajo conjunto con la defensoría del pueblo tras la firma de los acuerdos.

Según la OCDE Colombia es un país de renta intermedia por lo que dejará de ser subsidiario de ayudas internacionales. A nivel estatal, el Plan director de Cooperación 2019 afirma que Colombia sigue siendo un país prioritario como receptor de fondos. La cooperación española está centrada en los tres departamentos con menor IDH: Nariño, Cauca y Chocó y se está ampliando a La Guajira con un proyecto de aguas. También realizan proyectos con perspectiva de género orientados al cultivo de cacao y la pesca de camarones, aunque desde la embajada no se trabaja directamente en la sustitución de cultivos.

Los diálogos con el ELN, para los que Pedro Sánchez se ofreció como mediador, se encuentran parados y en una situación crítica tras el atentado perpetrado en enero que dejó 21 personas muertas, aunque se espera poder contribuir a continuar con las conversaciones de paz una vez se den circunstancias más favorables.



- **Oficina de DD. HH del Ministerio del Interior de Colombia**

Esta institución tiene la tarea de crear un marco de garantías para el cumplimiento de los Derechos Humanos en Colombia, allí nos reunimos con Jenny Martínez, encargada de la oficina.

Nos exponen la dificultad del contexto colombiano con la reorganización de las disidencias de las FARC y la presencia cada vez mayor de narcotraficantes, razón por la que se está creando un plan de acción oportuna para garantizar la seguridad a través de una mayor presencia militar en territorios en conflicto con intención de generar confianza en la población y asegurar la integridad y la seguridad de los líderes y lideresas. Además, se están implementando programas de formación en DD. HH para lograr cierta sensibilización en los cuerpos de seguridad (policía y ejército).

Cuando le corresponde el turno a la delegación se pregunta sobre los ascensos concedidos a militares relacionados con “falsos positivos” pero no se obtiene ninguna respuesta. Al igual que cuándo se pregunta sobre medidas de protección para Andrés Narváez.

“O se hace algo desde el ministerio o a Andrés lo van a matar”

- **Defensoría del pueblo**

Según se ha podido constatar durante toda la visita, la Defensoría del Pueblo es el único organismo público en el que la gente confía. Esta oficina se encarga de gestionar el sistema de alertas tempranas, que nace en 2001 con fondos de cooperación internacional a causa de las matanzas y desplazamientos. Cuando se reportan indicios de violencia se inicia un proceso que parte de la recogida y verificación de datos en el terreno para después realizar un análisis y un informe de riesgos y concluir con un protocolo para las personas amenazadas. Hasta 2016 la Defensoría se encargaba de realizar los informes de riesgo, era el gobierno quién se ocupaba de emitir las alarmas, pero con la firma de los acuerdos esta responsabilidad pasa también a la Defensoría. En este sistema de alarmas tempranas son claves los líderes y lideresas sociales como fuentes de información en los territorios.



Las cifras de estas alarmas estremecen: desde 2016 han sido 461 los casos de homicidio registrados de los que sólo se pudieron recibir 71 alarmas tempranas. Se necesita cooperación por parte de las fuerzas armadas para que el sistema de alarmas tempranas funcione.

Este año habrá elecciones regionales en Colombia y el riesgo de violencia sobre el liderazgo social se verá incrementado. La última semana ya se registraron dos asesinatos de personas que iban a ser candidatas en las elecciones.

- **Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las personas Refugiadas**

Como es habitual en cada visita, una parte de la delegación se reúne con el alto comisionado de la ONU donde se comparten los datos obtenidos en el terreno.

Preocupan los pocos avances de la restitución de tierras, ya que de los 7 años que se dieron en un principio para restituir los 6 millones de hectáreas sólo quedan 3 años y se han restituido apenas 200.000 y no se sabe que ocurrirá una vez acaben estos plazos. A pesar de la esperanza que se puso en esta herramienta se están presentando muchos problemas para utilizarla, como la falta de seguridad jurídica en los territorios y los conflictos con empresas que deberían deshacerse de tierras para el fondo creado.

Se destaca una idea que cada vez suena más tras la firma de los Acuerdos y es que desde entonces, en Colombia se han abierto más espacios que nunca para la participación, la discusión y el diálogo social.

También se comenta el gran desconocimiento existente en Europa sobre la situación colombiana y en Latinoamérica en general, gracia al sesgo por parte de los medios de comunicación que tienden a focalizar su atención en países y épocas muy puntuales.



- **Frente Alternativo Revolucionario del Común**

El partido creado tras la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nos recibe en su sede a las afueras de Bogotá. Nos reunimos allí con algunas de sus representantes en el parlamento de Colombia, de la dirección del partido y otras personas que les asesoran en materia de Derechos Humanos.

Después de un resumen de todos los procesos de paz que han vivido las FARC desde su creación, nos sitúan en el presente con un análisis de los Acuerdos de la Habana, la desmovilización de la guerrilla y el Plan de Desarrollo del Gobierno de Colombia.

El escenario es complicado y es que desde la firma de los Acuerdos se han producido 94 asesinatos contra firmantes de las FARC que se estaban reincorporando a la vida civil. La mayoría de estos asesinatos se producen en zonas con presencia paramilitar en las que también se asesina a la dirigencia social, en especial en los departamentos de Cauca, Antioquia y el Norte de Santander, por lo que una pequeña parte de las personas que firmaron los acuerdos y se desmovilizaron están volviendo a las veredas para unirse a grupos disidentes como las GUP (Guerrillas Unidas del Pacífico) o el Frente XVIII. El partido les define como personas desertoras, ya que considera que para ser disidencias deberían tener un proyecto político y no es el caso.

La voluntad del nuevo gobierno de hacer cumplir los acuerdos es nula, esto se refleja en el nuevo Plan de Desarrollo dónde apenas se mencionan el acuerdo de paz o el conflicto armado cuándo por ley debería incluir al menos un capítulo completo. También pelagra el punto 5, la Jurisdicción Especial para la Paz, cuándo sería de vital importancia el fortalecimiento de este órgano para el reconocimiento de las víctimas del conflicto, de las responsabilidades y el esclarecimiento de la verdad.



“Aquí no se puede negociar la paz, dónde hay hambre no va a haber paz” (Taxista en la Circunvalar, Bogotá)

Sumapaz: las mineras ¡No pasarán!

Para concluir el viaje, un día antes de volver a España la delegación se desplaza al páramo de Sumapaz. Esta zona del Sur del Departamento de Cundinamarca, a unas pocas horas del centro de Bogotá, se encuentra en un páramo a una altura superior a los 4000 metros sobre el nivel del mar. Después de años marcada por la presencia de las FARC, ya desmovilizadas, aún mantiene una cifra desproporcionada de militares (3000 efectivos) para la población que la habita (menos de 6000 personas), quizá debido al alto nivel de organización campesina que se ha alcanzado allí, y en el último año se ha impuesto la creación de dos puestos más de policía.

Nos invitan a la que será la asamblea previa a la creación de la Zona de Reserva Campesina de hecho en la que se exponen los principales problemas de la zona; el incumplimiento sistemático de los acuerdos de paz, el desempleo femenino, la presencia militar desmesurada y el más acuciante, el peligro de la minería, razón por la que se creará la Zona de Reserva.



"No abandono, vendo ni empeño este terruño sagrado. Como lo amo quiero cuidarlo, eso le exijo al estado"



Conclusiones.

La XV visita de Verificación de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de recorrer durante diez días una pequeña parte Colombia de Sur a Norte. Durante la visita a cada una de las zonas se han podido observar patrones que se van repitiendo independientemente del lugar.

La desmovilización de las FARC ha dejado un vacío de poder en los territorios a los que el estado no ha podido llenar, este vacío lo han llenado otros grupos armados: disidencias de las FARC, el ELN, grupos de narcotraficantes y paramilitares se disputan ahora estas zonas mientras las poblaciones sufren el fuego cruzado y el resto de las consecuencias de la guerra como la privación de libertades, el reclutamiento forzoso, el desplazamiento forzado de comunidades rurales o las zonas minadas.

No se está cumpliendo el punto uno de los Acuerdos de la Habana, no se están restituyendo las tierras prometidas y la creación de las "zonas de reserva campesina" es obstaculizada generalmente por intereses de empresas extractivistas. En algunas zonas se teme la repetición de despojos de tierras y desplazamientos forzados que se habían reducido en los últimos años.

El actual gobierno se niega a incluir en el Plan de Desarrollo los recursos necesarios para cumplir los Acuerdos de Paz y avanza con el desmantelamiento de los mecanismos creados para su implementación.

Se viola sistemáticamente el derecho internacional humanitario, es habitual ver militares rodeando colegios y los testimonios afirman que el ejército recluta menores para utilizarlos como informadores. El acceso a la educación en Colombia depende de la zona en la que se resida, quedando muchas veredas sin este derecho y negando a la juventud rural colombiana la oportunidad de un futuro mejor.

Es un hecho que Colombia continúa inmersa en un conflicto social y militar, las bases y la voluntad para la paz de la mayor parte de los actores del conflicto están ahí, pero aún queda mucho por hacer. Toda la sociedad colombiana sufre los efectos, en especial el liderazgo social que, encargado forzoso de velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz, está sufriendo un genocidio, algo que está haciendo cohesionar cada vez más a una sociedad que quiere la paz y cada vez está más organizada para luchar por ella.





Gracias.

Al voluntariado y la base social de Ingeniería Sin Fronteras Asturias. La visita y el programa de acogida siguen cumpliendo su cometido y cada vez tienen más reconocimiento tanto en España como en Colombia.